



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL
SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL BOGOTÁ

No. S-2020- MEBOG - SIJIN 1.10

Bogotá D.C. 19 de marzo del 2020

Señor Juez
SESENTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SECCION TERCERA
Bogotá

ASUNTO: HABEAS CORPUS
Accionante: ADOLFO GIOVANNY CASTRILLON MURILLO
Accionados: URI PUENTE ARANDA

Cordial saludo:

Por medio de la presente, con todo respeto y de manera atenta, me permito dar respuesta a la acción de tutela en los siguientes términos:

OPORTUNIDAD PROCESAL

La presente respuesta se presenta en término, habida cuenta que la notificación a la Policía Metropolitana de Bogotá se surtió el día 19 de marzo de 2020.

PRETESIONES DEL ACCIONANTE

Solicita del juez que, acoja la solicitud de habeas corpus, por detención ilegal y arbitraria acaecida el 13 de marzo de 2020 y como consecuencia restablezca de manera inmediata la libertad de ADOLFO GIOVANNY CASTRILLON MURILLO por pena cumplida dentro del proceso penal radicado seguido por el delito de tentativa de extorsión.

ACTUACION POLICIAL FRENTE A LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA INCONFORMIDAD DEL ACCIONANTE.

Es preciso indicar que el señor **ADOLFO GIOVANNY CASTRILLON MURILLO** fue capturado el día 13 de marzo de 2020, por la comisión del delito de EXTORSION EN EL GRADO DE TENTATIVA y fue puesto a disposición del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio-Meta.

Mediante decisión de fecha 16 de marzo de 2020, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio comisionó a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, para que de manera inmediata expidan orden de encarcelación ante el Director del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano en contra de ADOLFO GIOVANNY CASTRILLON MURILLO cc 15.961.705 para cumplir 60 meses de prisión, impuesta por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Funciones de Conocimiento, en sentencia de fecha 22 de abril de 2014, por el delito de extorsión en grado de tentativa, sentencia que fue modificada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Villavicencio.

El 18 de marzo de 2020, se expide por el Juzgado Veintiuno (21) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, boleta de encarcelación No. 026 con destino al COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA "COMEB" para mantener PRIVADO DE LA LIBERTAD al señor ADOLFO GIOVANNY CASTRILLON MURILLO.

Su señoría conforme la documentación anteriormente relacionada es claro que el señor ADOLFO GIOVANNY CASTRILLON MURILLO, esta legalmente capturado, por lo que no se presenta violación a derechos fundamentales o privación ilegal de la libertad por parte de la Policía Nacional.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

"La actividad de la Policía está destinada a proteger los derechos fundamentales tal como está contenido en la Constitución Política y en pactos, tratados y convenciones internacionales de Derechos Humanos, suscritos y ratificados por Colombia. La actividad Policial está regida por la Constitución Política, la ley y los derechos Humanos.

ARTICULO 2° Principios. *El servicio público de Policía se presta con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, control ciudadano y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Por tanto, el interés por mantener la armonía social, la convivencia ciudadana, el respeto recíproco entre las personas y de éstas hacia el Estado, da a la actividad policial un carácter eminentemente comunitario, preventivo, educativo, ecológico, solidario y de apoyo judicial.*

ARTICULO 3°. *Límites de la actividad Policial. Ninguna actividad de Policía puede contrariar a quien ejerza su derecho sino a quien abuse de él.*

ARTICULO 4°. *Inmediatez. Toda persona tiene derecho a recibir inmediata protección contra cualquier manifestación delictiva u contravencional y el deber de cooperar con las autoridades.*

ARTICULO 19. *Funciones Generales. La Policía Nacional está instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia, garantizar el ejercicio de las libertades*

públicas y los derechos que de éstas se deriven, **prestar el auxilio que requiere la ejecución de las leyes y las providencias judiciales y administrativas** y ejercer, de manera permanente, las funciones de: Policía Judicial, respecto de los delitos y contravenciones: educativa, a través de orientación a la comunidad en el respecto a la ley; preventiva, de la comisión de hechos punibles; de solidaridad entre la Policía y la comunidad; de atención al menor, de vigilancia urbana, rural y cívica; de coordinación penitenciaria; y, de vigilancia y protección de los recursos naturales relacionados con la calidad del medio ambiente, la ecología y el ornato público, en los ámbitos urbano y rural.

De lo anterior los requerimientos allegados por los despachos judiciales de la Rama Judicial, enviados a LA POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA, son orden de estricto cumplimiento que vienen enmarcadas desde la protección de los fallos de tutela tiene su respaldo en el literal C) del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos que obliga a los Estados Partes a “garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso (de amparo o tutela)”

Esta facultad de imponer sanciones que tiene el juez constitucional, se encuentra perfectamente justificada en que “el incumplimiento de las sentencias judiciales constituye una trasgresión del derecho fundamental de acceso a la justicia” [42], el cual incluye, el derecho a obtener el cumplimiento de las decisiones consagradas en las sentencias de tutela.

El fundamento legal del desacato está consagrado en los artículos 52 y 27 del Decreto 2591 de 1991, en virtud de los cuales se establece:

“Artículo 52. Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto, incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis (6) meses y multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción. ”.

“Artículo 27. (...) El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia (...)”

Respecto de los desacatos se tiene que el trámite que debe adelantarse para obtener el cumplimiento de un fallo de tutela consiste en poner en conocimiento de la situación al juez que conoció del asunto, para que éste adelante todas las gestiones necesarias para el efecto. De otro lado, se ha establecido que el incidente de desacato es un mecanismo de creación legal, que procede a petición de la parte interesada, a fin de que el juez constitucional, a través de un incidente y en ejercicio de sus potestades disciplinarias, sancione con arresto o multa a quien con responsabilidad subjetiva desatienda las

órdenes proferidas en sentencias de tutela. **Lo anterior, con el único fin de "lograr la eficacia de las órdenes impartidas por el juez de amparo para la efectiva protección de los derechos fundamentales reclamados por los tutelantes"**, por lo cual se diferencia de las sanciones penales que pudieran ser impuestas. Es decir, el propósito del incidente será lograr que el obligado obedezca la orden allí impuesta y no la imposición de una sanción en sí misma.

NO HAY PERJUICIO IRREMEDIABLE

PERJUICIO IRREMEDIABLE. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, ha de entenderse el "efecto de perjudicar o perjudicarse", y perjudicar significa -según el mismo Diccionario- "ocasionar daño o menoscabo material o moral". Por tanto, hay perjuicio cuando se presenta un daño o menoscabo material o moral injustificado, es decir, no como consecuencia de una acción legítima.

No existe en el expediente de tutela prueba alguna que demuestre el detrimento de los derechos supuestamente conculcados, tampoco se vislumbra la posibilidad de su ocurrencia. Así sea sumariamente, el actor debió demostrarlo, pero brilla por su ausencia la prueba pertinente y conducente.

El perjuicio irremediable en este caso no tiene rostro en el cual se haya concretado. Frente a este tema la Honorable Corte Constitucional en la sentencia T – 210 de 2011, Magistrado Ponente JUAN CARLOS HENAO PERE, señaló: **"En este sentido, de acuerdo a la jurisprudencia de esta Corporación, cuando el peticionario interpone la acción de tutela, como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, este tiene la carga de probar, aunque sea sumariamente, la existencia de un perjuicio que: (i) sea inminente, es decir que produzca, de manera cierta y evidente, la amenaza de un derecho fundamental; (ii) imponga la adopción de medidas urgentes para conjurar; amenace gravemente un bien jurídico que sea importante en el ordenamiento jurídico y; dada su urgencia y gravedad, imponga la impostergabilidad del amparo a fin de garantizar el restablecimiento del orden social justo en toda su integridad, pues, de lo contrario, la acción se torna improcedente."**

LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA-Se entiende satisfecha con la correcta identificación de las personas o autoridades responsables de la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales.

LA ACCION DE TUTELA-Integración de la causa pasiva busca evitar sentencias desestimatorias o decisiones inhibitorias/**ACCION DE TUTELA**-Integración adecuada del contradictorio como requisito de validez.

Ha manifestado la Corte que la integración de la causa pasiva busca evitar el proferimiento de sentencias desestimatorias que como es obvio resultan perjudiciales para el demandante, e igualmente, que se adopten decisiones inhibitorias las cuales se encuentran proscritas en sede de amparo constitucional por expreso mandato del parágrafo único del artículo 29 del Decreto

2591 de 1991. En este sentido, para hacer realidad el objetivo propuesto con la implementación de la acción de tutela, cual es la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales, es requisito sine qua non integrar adecuadamente el contradictorio, pues de su plena observancia depende no solo la garantía del derecho de defensa de quienes están involucrados en la violación o amenaza que se alega, sino también la posibilidad de que el juez constitucional "pueda entrar a proferir la respectiva sentencia estimatoria, en los casos en que la previa valoración fáctica y probatoria arroje, como único resultado, la necesidad de ordenar la protección de los derechos constitucionales afectados".

Legitimación de la causa pasiva. Obligación subsidiaria del juez de integrar adecuadamente el contradictorio. Nulidad de la actuación por falta de legitimación en la causa pasiva.

Como es sabido, la acción de tutela fue instituida por el Constituyente de 1991 como un mecanismo procesal de naturaleza especial, preferente y sumario, radicado en cabeza de toda persona, cuyo objetivo es la protección concreta e inmediata de los derechos fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por las autoridades públicas o, excepcionalmente, por los particulares en los casos definidos en la ley.

Ha precisado la Corte[1] que, aun cuando la acción de tutela esta llamada a desarrollarse dentro de un marco de relativa informalidad, atribuible a las características muy particulares que la identifican, el procedimiento que sigue a su ejercicio se encuentra cobijado por el derecho al debido proceso (C.P. art. 29), de manera que en su trámite se deben satisfacer ciertos presupuestos básicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integración de la causa pasiva.

Sobre la legitimación en la causa por pasiva, esta Corporación viene sosteniendo[2] que la misma se entiende satisfecha con la correcta identificación de las personas o autoridades responsables de la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados[3], destacando a la vez que su adecuada integración persigue garantizar a los presuntos implicados el derecho a la defensa y, por esa vía, permitirles establecer el grado de responsabilidad que les pueda asistir en los hechos que son materia de la controversia constitucional.

Ahora bien, aun cuando en principio es al demandante a quien le corresponde identificar al presunto infractor de sus derechos, la jurisprudencia ha precisado que al juez de tutela le asiste la obligación subsidiaria de integrar de oficio la causa pasiva o el legítimo contradictorio, cuando encuentre que el actor ha citado a quien en realidad no es responsable de la conducta imputada o, en su defecto, cuando observe que no ha referenciado a la totalidad de los sujetos que están involucrados en la amenaza o violación alegada.

Para la Corte, la circunstancias específicas de que el acceso a la tutela se haya radicado en cabeza de cualquier persona (C.P. art. 86), sin que requiera de asistencia jurídica o

representación judicial para su ejercicio, descarta de plano que pueda exigirse del demandante precisión en el manejo de los conceptos jurídicos o en el conocimiento de la estructura del Estado y de las organizaciones privadas respecto de las cuales por ministerio de la ley es procedente el amparo constitucional.

Por ello, en virtud de los principios de informalidad y oficiosidad que orientan el proceso de tutela, las deficiencias relacionadas con la legitimación en la causa pasiva deben ser suplidas directamente por el juez, quien no solo cuenta con la formación y preparación jurídica adecuada, sino también con las herramientas probatorias que le da la ley para alimentar el juicio y hacer una adecuada valoración de todos los aspectos jurídicos y fácticos que rodean el caso concreto, permitiéndole arribar a la decisión judicial más ajustada a derecho.

En el caso concreto, por parte de la Seccional de Investigación Criminal y la Policía Metropolitana de Bogotá, no se ha generado ninguna acción u omisión que vulnere o amenace los derechos fundamentales del accionante ADOLFO GIOVANNY CASTRILLON MURILLO, toda vez que el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio comisionó a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, para que de manera inmediata expidan orden de encarcelación ante el Director del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano en contra de ADOLFO GIOVANNY CASTRILLON MURILLO para cumplir 60 meses de prisión, impuesta por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Funciones de Conocimiento, en sentencia de fecha 22 de abril de 2014 y obra la boleta de encarcelación que dispone mantenerlo privado de la libertad mientras el COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA "COMEB" asigne un cupo para su traslado.

ANEXOS Y PRUEBAS

1. Boleta de detención, derechos del capturado, acta del buen trato del señor ADOLFO GIOVANNY CASTRILLON MURILLO
2. Decisión del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio.


SOLICITUD

Con fundamento en las razones de hecho y de derecho previamente expuestas, solicito respetuosamente al Honorable Despacho se sirva DENEGAR todas y cada una de las pretensiones incoadas por parte del señor **ADOLFO GIOVANNY CASTRILLON MURILLO**, accionante dentro del presente HABEAS CORPUS por **IMPROCEDENCIA DE LA MISMA** y de manera subsidiaria a excluirmos del trámite de la presente acción, en relación con la Seccional Investigación Criminal Bogotá, URI Puente Aranda.

NOTIFICACIONES

Seccional Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Bogotá, situada en la Carrera 15 No. 6-20

Atentamente,



Capitán: URIEL DAVID OVALLE SALGADO
Jefe celdas SIJIN MEBOG

Anexo: tres (3 folios)

Elaborado por: Dra. Milena Ortiz Malagón
Revisado por: CT. URIEL DAVID OVALLE SALGADO
Fecha de elaboración: 19/03/2020
Ubicación: D: /mis documentos /oficios 2020

Carrera 40 # 10ª-08
Teléfono: 3228442053
mebog.sijin-cor@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACION PÚBLICA CLASIFICADA